



MATIAS DELACROIX

Continúa el registro en 2020

Protestar es un derecho

Marco Antonio Ponce*

En los primeros nueve meses de 2020 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) logró documentar 7 mil manifestaciones en toda Venezuela, más del 90 % por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). La mayoría de estas movilizaciones fueron protagonizadas por vecinos y trabajadores, en rechazo a la imposición de medidas o políticas públicas deficientes que derivan en la profundización de la emergencia humanitaria compleja y que impacta con mayor fuerza a grupos vulnerables

La pérdida de calidad de vida, un salario mínimo mensual inferior a un dólar, un pronunciado colapso de servicios básicos y la vulneración sistemática de derechos, son la base para las numerosas manifestaciones de calle que se registran en Venezuela, que también exigen un cambio de gobierno y el retorno de la democracia.

Tabla 1. **9 meses de protestas en Venezuela**

Enero	618
Febrero	779
Marzo	580
Abril	716
Mayo	1.075
Junio	646
Julio	649
Agosto	748
Septiembre	1.193

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Las manifestaciones ciudadanas no se han detenido durante este año, ni el riesgo por posible contagio de COVID-19; ni medidas gubernamentales como el Decreto de estado de alarma anunciado el pasado mes de marzo, que contempla cuarentena o confinamiento en los hogares y restricciones de movilidad, han logrado frenar a las personas en la exigencia de sus derechos humanos en las calles.

Solo en el mes de septiembre el ovcs logró registrar 1.193 manifestaciones en todo el país, el índice más alto en un mes durante este año, con un promedio de cuarenta diarias. Si comparamos con igual período del año pasado representa un incremento de 68 %.

Al mirar en detalle estas manifestaciones encontramos algunos aspectos que nos permiten conocer qué exigen los ciudadanos, dónde y cómo lo hacen, además de la respuesta institucional. Habitantes de pequeñas poblaciones y caseríos de distintas regiones del país salieron a las calles para exigir calidad en los servicios básicos, rechazar la crisis de gasolina y un salario mínimo mensual inferior a un dólar, destacando la presencia de las mujeres en el liderazgo de las manifestaciones por servicios básicos.

Las movilizaciones se registraron en todos los estados de Venezuela, pero destaca la zona oriental. Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112, seguido de los estados Sucre (107), Nueva Esparta (102), Bolívar (94), Lara y Zulia con 79 protestas, respectivamente. De igual manera, es de señalar que hay estados donde no se reportan llamativos números de protestas, aunque padecen una profunda crisis de derechos sociales y un fuerte control social, como puede ser el caso de Delta Amacuro.

Tabla 2. **Protestas en Venezuela Septiembre 2020**

Estado	Septiembre
Amazonas	17
Anzoátegui	112
Apure	2
Aragua	16
Barinas	70
Bolívar	94
Carabobo	43
Cojedes	28
Delta Amacuro	18
Distrito Capital	72
Falcón	39
Guárico	22
Lara	79
Mérida	33
Miranda	62
Monagas	34
Nueva Esparta	102
Portuguesa	38
Sucre	107
Táchira	46
Trujillo	32
Vargas	19
Yaracuy	29
Zulia	79

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Una característica recurrente de la protesta venezolana es su espontaneidad, con un mínimo de organización vecinal, sin indicios de una conducción o acompañamiento, o plan organizado desde sectores o partidos políticos tradicionales. Solo en contadas excepciones líderes sociales locales, vinculados a partidos políticos, han organizado protestas.

La calle continúa siendo el espacio histórico para la exigencia de derechos humanos y para alzar

la voz denunciando a funcionarios o instituciones que no cumplen con su labor. En septiembre se registraron 489 cierres de calles o avenidas; 386 concentraciones en calles o frente a instituciones públicas; 239 “pancartazos”; 189 “cacerolazos” nocturnos y cuarenta marchas. Esto deja constancia de que existen ciudadanos en movimiento, con un carácter pacífico y democrático.

Los derechos no son exigidos solo durante el día, continuamos observando cómo los vecinos expresan su descontento y molestia ante el colapso de los servicios básicos, realizando cacerolazos en horarios nocturnos. Durante este mes se reportaron 269 protestas nocturnas.

Otro aspecto relevante es la presencia de las protestas combinadas. Un fenómeno que se viene registrando con mayor intensidad en los últimos tres años, donde las personas exigen varios derechos en una misma acción de protesta. Esto evidencia cómo se ha ido complejizando el contexto país en la medida en que la emergencia humanitaria compleja se profundiza. En septiembre, el ovcs registró 614 protestas donde se exigieron varios derechos simultáneamente, equivalente a 51 % de todas las protestas registradas en el mes. Los reclamos estuvieron relacionados fundamentalmente a la cotidianidad de los ciudadanos: servicios básicos, gasolina y salario digno.

La principal exigencia fue la gasolina, en 404 protestas. Conductores, transportistas, productores agrícolas, personal del sector salud y vecinos, que estuvieron en largas filas, incluso durante semanas, frente a estaciones de servicio, ante la imposibilidad de acceder al combustible realizaron cierres de calle en todos los estados del país. El estado Nueva Esparta lideró, por segundo mes consecutivo, el índice de protestas por escasez de combustible con un total de 53, seguido de los estados Barinas (43), Sucre (35) y Lara (33).

Siendo Venezuela un país productor de petróleo, con las mayores reservas de crudo del mundo, su principal industria carece de refinерías adecuadas para producir gasolina, al punto que debe importar para satisfacer el mercado interno.

Adicionalmente, el colapso de los servicios básicos sigue desmejorando las condiciones de las viviendas y la calidad de vida.

En septiembre, el servicio eléctrico fue exigido en 394 protestas. La problemática afecta de forma más aguda a los habitantes del interior del país, donde las fallas son constantes y la interrupción total del servicio puede durar hasta una semana seguida.

Por otra parte, se registraron trece protestas diarias donde los vecinos exigieron la venta de bombonas de gas doméstico –375 en el mes–. La carestía del gas ha llevado a las personas a realizar prácticas tradicionales y rudimentarias para poder cocinar sus alimentos como son los fogones a leña.

Otro de los aspectos que refleja las graves condiciones en las que viven los venezolanos es la ausencia de agua potable por las tuberías. En septiembre el OVCS documentó 315 protestas en las que se exigió agua potable, lo que representa un promedio de once diarias. Esta es una situación que se acentúa y continúa sin solución, a pesar del riesgo que representa no poder lavarse las manos, limpiar las superficies y mantener la higiene adecuada para hacer frente a la COVID-19.

Pasar semanas y meses sin recibir agua obliga a la población a pagar camiones cisternas en moneda extranjera, recorrer grandes trechos para coleccionar agua en pozos, manantiales, agua de lluvias o mar en algunas localidades costeras.

Aunque en septiembre el centro de las manifestaciones estuvo en el tema de servicios básicos, también se registraron acciones para demandar garantía de los derechos laborales.

Con un salario mínimo equivalente a menos de un dólar por mes, los venezolanos sufren la mayor precarización del empleo de la historia. Muchos deben recurrir a diferentes alternativas informales para subsistir, otros reciben ayuda económica de familiares que viven en el extranjero.

Entre amenazas de renuncias colectivas y movilizaciones a nivel nacional, médicos y maestros protagonizaron protestas en septiembre. Mientras otros trabajadores, de las empresas mixtas, la administración pública y empresas privadas, claman por medidas que mejoren el escenario económico del país y dignifiquen el empleo.

De las 1.193 protestas documentadas en septiembre, 273 respondieron a exigencias de derechos laborales. Esto significó un promedio de nueve protestas diarias.

Aunque en menor medida, también se registraron demandas por el derecho a la salud (107). Motivadas por las precarias condiciones, falta de suministros y equipos de bioseguridad esenciales para el personal sanitario que enfrenta al COVID-19, que ha derivado en un aumento en el número de personal contagiado y fallecido por el virus.

Un dato importante es que, del total de protestas vinculadas al derecho a la salud, en veinte oportunidades los manifestantes denunciaron el fallecimiento de pacientes porque no contaron con el tratamiento adecuado y oportuno para su enfermedad y para garantizarles la vida.

La respuesta de las instituciones venezolanas a las manifestaciones es insuficiente o inexistente. En algunos casos responden enviando bolsas de alimentos o camiones cisternas de agua para aplacar el descontento del momento e impedir una reacción en cadena entre pueblos o municipios cercanos, acciones que no resuelven el problema de fondo y que profundizan el control social y discriminación por razones políticas.

Quienes no son militantes del partido PSUV y sus aliados pro oficialistas, o no están inscritos en el sistema del carnet de la patria, corren el riesgo de ser excluidos o percibir en menor medida cualquier respuesta institucional.

Por otra parte, la represión, criminalización, judicialización y estigmatización continúa siendo la respuesta sistemática del Estado hacia las movilizaciones pacíficas, a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías de los estados, civiles armados y tribunales.

En el mes de septiembre fueron reprimidas 79 manifestaciones en diecinueve estados del país, con un saldo de más de 233 personas detenidas arbitrariamente; 52 heridos de bala, perdigones o tratos crueles, inhumanos o degradantes; una persona asesinada por impacto de bala identificada como Víctor Rivero (20), en el estado Sucre. También fueron militarizados veinte estados donde se reportaron protestas, y los vecinos denunciaron numerosos allanamientos ilegales en viviendas donde habitan personas que participaron en las manifestaciones.

Los conflictos sociales revelan la profunda emergencia humanitaria compleja que atraviesan todos los venezolanos, aunque de manera más dramática y aguda quienes viven en el interior del país.

Las carencias y vulneraciones de derechos humanos son el principal motivo para que las protestas sigan creciendo en cantidad y en número de participantes. Los venezolanos merecen una vida digna y bajo las actuales condiciones sociales y políticas están lejos de alcanzarla. Por eso, la protesta no se detiene, en las primeras dos semanas del mes de octubre el OVCS documentó preliminarmente más de ochocientas, principalmente en el interior y por derechos sociales.

Mientras no existan soluciones y un cambio real y profundo en la gestión pública, los venezolanos seguirán movilizándose y cada vez más organizados y decididos a vivir con dignidad.

Protestar es un derecho, protestar no es un delito.

*Defensor de derechos humanos. Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.